

**LOS JURADOS DE CONCIENCIA EN EL SISTEMA ADVERSARIAL: ANÁLISIS
DE DERECHO COMPARADO, COLOMBIA V. ESTADOS UNIDOS**

**THE JURIES OF CONSCIENCE IN THE ADVERSE SYSTEM: ANALYSIS OF
COMPARATIVE LAW, COLOMBIA V. UNITED STATES¹**

CAMILA ANDREA CARRILLO BONILLA ²

Resumen

El juzgamiento de las conductas que revisten las características de delito, en tanto atentan contra los bienes jurídicamente tutelados de un Estado, constituyen la base del ejercicio de la Acción Penal y el Ius Puniendi como facultad de éste para emitir un reproche, que se colige del rechazo de una sociedad contra todo aquello que atente contra su ordenamiento jurídico. Tal juicio es ventilado ante un juzgador o cuerpo colegiado que profiere su decisión y que, en el caso norteamericano, se trata de un jurado, encargado de reflejar la voluntad del pueblo y los intereses sobre los valores que su legislación protege como fundantes. Sin embargo, esta institución no ha sido adoptada por Colombia, que ha propendido la adopción de un sistema acusatorio, por lo que reviste importancia realizar un análisis respecto de la legitimidad como criterio de valoración para entender la teleología de las diferencias entre ambos ordenamientos jurídicos.

¹ Resultado del diplomado sistema penal acusatorio desde una perspectiva comparada

² Estudiante de la facultad de derecho de la universidad libre, seccional Bogotá

Palabras clave:

Sistema Penal acusatorio, Legitimidad, Jurado, Sociedad, Derecho, Adversarial, Teleología, Jurado de conciencia.

Abstract

The prosecution of the behaviors that have the characteristics of crime, insofar as they attempt against the legally protected property of a State, constitute the basis of the exercise of the Criminal Action and the *Ius Puniendi* as its faculty to issue a reproach, which is based on the rejection of a company against everything that violates its legal system. Such a judgment is heard before a judge or collegiate body that professes its decision and that, in the North American case, it is a jury, in charge of reflecting the will of the people and the interests on the values that their legislation protects as foundations. However, this institution has not been adopted by Colombia, which has advocated the adoption of an accusatory system, so it is important to perform an analysis regarding legitimacy as a criterion of assessment to understand the teleology of the differences between both legal systems.

Keywords:

Criminal accusatory system, Legitimacy, Jury, Society, Law, Adversarial, Teleology, Jury of conscience.

Introducción

El ejercicio de la Acción Penal constituye el instrumento de materialización del *ius puniendi*, como derecho del Estado para perseguir y juzgar las conductas que atentan contra los bienes jurídicamente tutelados por el ordenamiento jurídico que éste se ha determinado y en atención a su política criminal. En este fenómeno varían diversos factores, como el ordenamiento jurídico de cada estado, cuya relación directa con la política criminal y los bienes jurídicamente tutelados denota puntos de diferenciación o similitud frente a otros sistemas normativos.

En materia penal, el proceso de juzgamiento atiende al reproche de las conductas que violan los derechos, garantías o bienes jurídicos que un ordenamiento legal ha tutelado como esenciales, y que deben ser protegidos, por cuanto encuentran sustento en instituciones como la Dignidad Humana, la Justicia, la vida, el trabajo, la democracia, el orden constitucional y legal, el bien común, entre otras.

La figura del jurado en materia criminal obedece, en principio, a la esencia misma del juzgamiento, que busca emitir un reproche por parte de la sociedad sobre una conducta que atente contra un derecho ajeno, habida cuenta la lesión que genera sobre la convivencia pacífica que requiere un Estado para asegurar el orden, la paz y la tranquilidad. La selección de un jurado propende legitimar al proceso, otorgándole una connotación democrática en donde representantes de un grupo social juzguen de forma objetiva y con base en el acervo probatorio, si consideran que el agente es responsable por la conducta que ha cometido y si le es imputable una condena o debería ser absuelto.

Colombia, país que ha tratado de consolidar un ordenamiento jurídico más garantista dentro del margen del constitucionalismo moderno, con prevalencia de una constitución dotada de derechos y herramientas efectivas para su materialización, ha vinculado un sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, de esencia anglosajona y construcción norteamericana, permeando el proceso con instituciones como la legalidad, la oralidad, la garantía de Derechos Fundamentales y la correcta separación de los intervinientes al interior de la audiencia de juicio, como se abordará más adelante.

Metodología

Para el desarrollo del proceso de investigación necesario a la fundamentación del artículo, se empleó un enfoque cualitativo, que siguiendo a Galeano M. (2009), “(...) es un campo de estudio de sí mismo. Cruza disciplinas, áreas del conocimiento y problemáticas. Un complejo e interconectado “sistema” de términos, conceptos, presupuestos (...)”.

Para la construcción del artículo se empleó la modalidad de investigación documental, de cuyo propósito Galeano ha señalado (2009) “es construir un referente teórico que guíe el trabajo investigativo, y no un marco cerrado para la interpretación y el análisis” (p. 32)

Lo anterior, en tanto los esfuerzos se centraron en el reconocimiento de la figura del Jurado de Conciencia y la forma en que se ha consolidado en Colombia y en los Estados Unidos de América, teniendo múltiples acepciones e interpretaciones respecto de su importancia y pertinencia según las disposiciones y condiciones propias de cada país.

En ese sentido, se realizó una búsqueda bibliográfica entre marzo y abril del 2018, en diversas bases de datos como Vlex, repositorios en línea como Scielo Colombia y EBSCO, empleando los indicadores: Jurados de Conciencia, Jurados Penales, Sistema Penal Acusatorio, Sistema Adversarial, Jurados en Colombia. Ello, contrastándose con la información consolidada tras el Diplomado en Sistema Penal Acusatorio adelantado en la Universidad de la Florida, en Miami, donde se expusieron los elementos más imperativos del Sistema en EUA.

Los jurados en el Ordenamiento Jurídico norteamericano

En el ordenamiento jurídico norteamericano, los jurados para las causas criminales están consagrados en la Constitución Federal, en la sexta enmienda, en tanto han sido implementadas en el plano estatal, como una garantía de la sociedad y, además, del acusado mismo. El Sistema norteamericano se erige sobre el principio de confrontación, caracterizado por la posibilidad de enfrentar en igualdad de armas a la parte acusadora con garantías de recibir un juicio objetivo, por lo que la emisión del fallo reposa sobre 12 ciudadanos elegidos previamente quienes, al no tener relación con el aparato estatal, guardarán mayor objetividad en la decisión, evocando otro de los elementos más imperiosos del sistema.

Sin embargo, esta tradición ha sido heredada del derecho inglés, de tendencia consuetudinaria, en donde la tutela o no de los bienes jurídicos recae más legítimamente en la gravedad de una conducta en tanto esta atente contra los valores sociales, la dignidad humana y derechos en tanto éstos sean considerados como bienes supremos por parte de la sociedad y, por tanto, reprochable toda conducta en su contra adelantada por un miembro de la comunidad. Esta caracterización de la comunidad es lo que busca precisamente el sistema de Inglaterra.

Los procedimientos sobre los cuales debe regirse el proceso y que deben ser acatados por los jurados, así como por cada una de las partes intervinientes, son estructurados por el órgano legislativo de cada estado, así como por el legislativo federal en relación con el Debido Proceso. Estos lineamientos, por tratarse de un sistema federal, no guardan una relativa estabilidad como

en el caso colombiano, en donde la legislación es unívoca por tratarse de una República unitaria. Estas disposiciones legales están relacionadas con la prueba, los aspectos de cada uno de los juicios, los términos y oportunidad probatoria y los requisitos para la incorporación de cualquier elemento cognoscitivo al proceso, de modo que se proteja la imparcialidad y la objetividad que debe caracterizar a los 12 ciudadanos que integran el jurado.

Como es propio de los sistemas democráticos, las leyes son proferidas en el seno de un órgano legislativo, llamado congreso, con sujeción al cual las disposiciones legales que regulan el proceso y los aspectos más imperativos de este pueden sufrir modificaciones, en atención a diversas coyunturas o adversos panoramas políticos, en donde además se ilustra uno de los elementos más destacados de los sistemas adversariales modernos: el principio de legalidad.

Dicho de otro modo, la construcción de sistemas adversariales que no sucumban al absolutismo que otrora comportaban los sistemas inquisitivos, llevó al reconocimiento de la legalidad como elemento esencial del proceso, por lo que todo juzgamiento debe ventilarse a través de leyes preexistentes, que de la forma más objetiva posible no dejen al operador jurídico la posibilidad de sopesar los hechos en subjetividades, sino en un criterio objetivo que atienda la teleología misma del proceso penal y ejercicio del ius puniendi: la protección exclusiva de bienes jurídicamente tutelados.

La configuración de un jurado criminal atiende además a la volatilidad del contexto social, esto es el constante cambio en que se ve inmerso el estado frente a un conjunto de realidades que denotan expresiones diversas por parte de la población. En ese sentido, el imaginario político cobra trascendencia para el proceso de juzgamiento adelantado por jurados, pues estos atienden a construcciones colectivas. Sea esta ocasión de citar los casos de adopción de la regla de elección por las mayorías en Oregón y Texas, y el consenso sobre la pena de muerte (The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act de 1996) (Berkowitz 1991)

Se tiene entonces una institución cuya génesis se remonta al derecho anglosajón, primero de Inglaterra y luego adoptado por los Estados Unidos de América, que busca dotar el proceso penal de garantías tanto para el acusado como para la sociedad, habida cuenta la función de prevención general con que cuenta la norma penal en sentido impositivo y el reproche por prevención especial que impone la justicia, para salvaguardar los intereses sociales. Las normas del país anglosajón han buscado una mayor vinculación y efectividad de la institución a través de reformas como la del Estado de la Florida (en el caso William Vs. El Estado de la Florida, de 1970) en donde se habilita la conformación de jurados por menos de 12 miembros.

Así las cosas, el estudio del modelo norteamericano en tanto referente en la implementación del jurado para causas criminales debe partir de una conceptualización y caracterización teleológica, que denote su importancia y la esencia de sus implicaciones para el ordenamiento jurídico. En este punto es imperioso citar a Roberto Gargarella (1996), quien remonta el surgimiento de los jurados en los juicios criminales al periodo crítico norteamericano comprendido entre 1780 y 1790; tras un esfuerzo por -inicialmente- separar al pueblo de la administración, especialmente de los órganos judiciales.

La construcción de legitimidad es, en últimas, el fundamento teleológico de los jurados penales, como quiera que en tanto los jueces no son elegidos popularmente, un sistema de pesos y contra pesos demanda la aplicación concreta de medidas que permitan vincular activamente a la sociedad como partícipe e interviniente de las causas judiciales, con sujeción al interés común sobre el principio de justicia. Los pesos y contra pesos exigen vinculación de la conciencia y la voluntad popular en todas las esferas de la administración pública, lo que en materia penal se resuelve con los jurados, cuando éstos se sujeten a normas que garanticen la imparcialidad y la objetividad, como insumo de un espacio propicio para la confrontación. Si quiera de forma sumaria, o, aunque esto pase a la mera teoría, los jurados desempeñan un papel esencial en el acercamiento entre la sociedad y la justicia, que impera como buen síntoma de los modelos democráticos. (Lipset 1963)

No obstante, la figura no constituye una construcción propia del Sistema Norteamericano, sino una herencia del derecho inglés, consolidada en la Carta Magna, precisamente como una garantía para los comunes, es decir el pueblo, de que tuviera participación directa en el juicio de las conductas punibles, so pena de que la Monarquía prosiguiera con sus elecciones arbitrarias, convirtiendo el aparato judicial en un sistema de persecución de detractores u opositores a las medidas adoptadas por el monarca o, en muchos casos, por el clero, cuya relación con la administración era intrínseca e innegable. De este modo, puede identificarse como una construcción propia de los movimientos humanistas, con tinte emancipador y liberador, para establecer un sistema de pesos y contrapesos al momento restringir la libertad de los individuos. Este tema se abordará a continuación.

La esencia del Jurado en las causas criminales y su connotación teleológica en los Estados Unidos de América

David Beetham (1991), refiriéndose al concepto de legitimidad expuesto por Weber, ha planteado criterio según el cual “una relación de poder no es legítima porque la sociedad crea en su legitimidad, sino porque puede ser justificada en términos de su creencia”. Dicho de otro modo, la legitimidad no corresponde propiamente a la aceptación en sentido lato sino a la fe que de tal nivel de aceptación se pueda configurar. La legitimación reviste especial importancia como criterio de valoración del derecho, en la medida en que permite encontrar la esencia del derecho y su instrumentación frente a la sociedad; para lo cual, en el caso de los jurados criminales, la legitimidad se erige como el criterio más importante, por la vinculación de la ciudadanía en las causas criminales. El análisis del sistema anglosajón y su posterior sopeso como sistema jurídico de referencia para un análisis de derecho comparado debe partir de la necesidad de justificar el sistema en términos de valoración del derecho, por lo cual se sigue un estudio hermenéutico y teleológico sobre su legitimidad.

La democracia se encuentra intrínsecamente relacionada con la legitimidad con que los jurados blindan a los sistemas judiciales, en el entendido que la participación directa del pueblo representa un modelo de autogobierno, en donde los pesos y contrapesos arrojan luz sobre la administración para impedir que ésta se separe de los fines esenciales para los cuales ha sido constituida, como la primacía del interés general, el respeto por el orden jurídico superior y la materialización de todas las garantías y prerrogativas inalienables que tuviera dicho ordenamiento. En tanto los jueces no denotan una elección popular, se excluye a la ciudadanía de la participación dinámica e incluyente en el poder de castigar las conductas criminales que atentan contra los derechos y que le corresponde al Estado. La importancia de una legitimidad social no es de poca monta, pues lo que emite el juicio penal es un reproche social propiamente dicho, por atentar contra los valores sobre los cuales se ha construido el Estado.

La tutela del Derecho penal sobre los valores constitucionales o legales de forma exclusiva y excluyente corresponde a los modelos ilustrados, que con posterioridad a la Revolución Francesa y los movimientos luteranos, buscan la reestructuración judicial, de modo que la limitación a libertades que supone el juzgamiento y enjuiciamiento penal obedezca a factores objetivos relacionados con la protección de bienes jurídicos tutelados; en este punto se puede

citar a , para quien el derecho penal constituye una última ratio o instancia, que no puede ser excedida por el juez. Así, la vinculación de la ciudadanía como sujeto destinado a tomar una decisión, ilustra la esencia misma del esquema penal, de modo que solo el pueblo puede emitir juicios de valor o desvalor sobre las conductas que atentan contra su cultura, su moral y sus derechos; los derechos e intereses que se ha trazado en un ordenamiento jurídico concreto.

Riveros Rengifo y Tobón Camacho (2017), citando a Alexis Tocqueville³, identifican como uno de los elementos más importantes de los jurados de conciencia en el modelo norteamericano la mínima probabilidad de que el juicio repercuta en la imposición de subjetividades, a lo que habría un mayor grado de probabilidad con el ejercicio de juzgamiento por parte de una sola persona. La participación democrática deposita en el pueblo la facultad de perseguir aquellas conductas que considera lesivas, de modo tal que se atienda en sentido estricto la esencia misma del juicio de reproche. Esta delegación de facultades de juzgador en cabeza de los ciudadanos, sin ningún conocimiento de derecho, remonta el reconocimiento de la norma jurídica y su efectividad en la legitimidad, como requisito más importante de calificación para que pueda proyectarse sobre la realidad de un determinado Estado.

Esta legitimidad ha sido la conseguida tras las conquistas humanistas de Inglaterra, con la Carta Magna, y posteriormente en Francia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, quitando de las facultades del Estado la de perseguir a los delincuentes, como quiera que se apreciaba un inadecuado uso de esta potestad para perseguir detractores y o contendores políticos, por lo que solo el pueblo en la máxima expresión de soberanía, en una democracia participativa, podía tomar decisiones sobre la eventual lesión a bienes jurídicos a que hubiera lugar con la comisión de conductas que revistieran las características de delito.

Sin embargo, también debe resaltarse que el modelo empleado en otros países, como es el del caso colombiano, en donde se ha erradicado la figura del jurado de conciencia en causas criminales, no supone una arbitrariedad o lesión a los principios sobre los que se erige el sistema democrático, sino un reconocimiento de otros elementos que, como se verán en el siguiente acápite, resultan más importantes frente a la estabilidad jurídica para el juzgamiento de conductas delictivas, sin que se afecten tampoco los Derechos Fundamentales, que se constituyen en una conquista del humanismo, etapa histórica resaltada en anteriormente como fuente de profundos cambios en el poder y el control al poder en los Estados de Europa y el mundo entero.

Una mirada al caso colombiano

En Colombia, la figura del Jurado de conciencia en las causas criminales estuvo en cabeza del pueblo por cerca de 140 años, consagrada en el ordenamiento jurídico desde 1853, para ser eliminada más tarde con el Decreto 1861 de 1989. El cambio en el sistema suscitó una serie de debates que denotan la connotación que tenía en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, algunas de las principales reclamaciones consideraban la erradicación de la figura como un golpe a la democracia, mientras otros la veían con buenos ojos, por considerarla una plataforma para que se presentara impunidad. Los primeros, más idealistas respecto de las instituciones del Estado, depositan en el orden supremo del poder soberano la configuración de los juicios de valor y de rechazo social contra las conductas punibles, mientras los segundos se inclinan más por la seguridad jurídica de fallos emitidos por jueces ilustrados en derecho.

El sustento con que se introdujo la figura del jurado de conciencia en Colombia fue, precisamente, la materialización de los principios democráticos que el mundo abanderaba por aquel entonces tras los procesos revolucionarios surtidos en Francia y otros países europeos, así como en los Estados Unidos de América. Fue en el gobierno del presidente José Hilario López, entre 1849 y 1853, en donde se introdujo al ordenamiento jurídico, lo que no es de extrañar teniendo en consideración otras medidas igualmente adoptadas como la despenalización del cultivo de tabaco, así como la supresión de la prisión por deudas y de la pena de muerte. El argumento principal fue la necesidad de que las personas fuesen juzgadas por otras personas iguales, lo que constituía un juicio justo y sin lugar a arbitrariedades por parte de la Administración.

La figura perduró en el tiempo y con la Constitución de 1886 aún tenía vida dentro del ordenamiento jurídico. Con la ley 78 de 1923, se hizo un reconocimiento -incluso- de la posibilidad de impugnar sentencias, ante la Corte Suprema de Justicia en sede de Casación en materia Penal, por fallos que no respetaran el veredicto emitido por el jurado del caso. Sin embargo, el desconocimiento de la figura y su erradicación paulatina inicia con el Decreto Legislativo 3347 de 1950, en donde el presidente Laureano Gómez le quitaría la facultad a los jurados para conocer delitos cuya lesividad fuera baja, con la idea de descongestionar la administración de justicia y dejar dichas conductas en manos de jueces únicamente. Sería solo hasta 1989, a través del Decreto 1861 expedido por el Presidente Virgilio Barco, que se

eliminaría totalmente la figura del Jurado de conciencia, no obstante ser retomada de forma sumaria en el Decreto 2700 de 1991, en cuyo texto se permite la conformación de *jurados de derecho*, con una connotación similar pero conformados por personas únicamente con conocimiento en las ciencias del derecho, buscando evitar casos de impunidad o la comisión de errores por temas de pasión social, que constantemente llega a ocurrir con los jurados conformados por personas de forma aleatoria.

Distinto a la tendencia norteamericana, en Colombia y su escenario jurídico, la figura del jurado era constantemente descalificada por suponer un instrumento de teatro antes que de materialización de la justicia. La adopción de decisiones por parte de los jurados, personas con un nivel de educación reguladamente básico pero sin conocimiento del derecho en sentido estricto, daba lugar a errores y subjetividades, en donde las orientaciones culturales podían permitir errores de interpretación y aplicación legal⁴. Incluso, tratadistas como Enrique Ferri y Carrara lo consideran un modelo “*irresponsable y teatral*”⁵.

Con la entrada en vigor del Acto Legislativo 03 de 2002, que reformó el artículo 116 de la Carta Política, se establece la figura de los Jurados de Conciencia, como mecanismo para el juzgamiento en materia penal y criminal. Sin embargo, la promulgación de la Ley 906 de 2004 cierra de forma temporal, y al menos a la vista por un largo lapso, la posibilidad de aplicar esta institución en el Sistema Judicial Colombiano. Si bien la Ley 906 consagra un modelo de tendencia adversarial y con espíritu de ser acusatorio, se desliga del jurado de conciencia, así como de otros elementos que vienen a desvirtuar el concepto y características propias del sistema invocado como referente. Así las cosas, el sistema aplicado en Colombia no comporta un modelo acusatorio en sentido estricto. A efectos de esclarecer una diferenciación con el modelo anglosajón norteamericano, se profundiza en la figura del jurado.

Si bien el Acto mantuvo el ejercicio de la Acción Penal en cabeza de la Fiscalía como ente acusador, ostenta algunas modificaciones que hicieron del sistema un modelo de proceso

⁴ En archivo del Periódico El Tiempo, con fecha de Publicación 07 de septiembre de 1990, se lee: La arcaica institución del jurado desaparece a los 140 años de vida positiva. Son los jueces populares que en audiencia pública y solo en conciencia fallaban los episodios criminales de mayor gravedad, comenzando por los delitos políticos. La Corte Suprema, en sentencia de ayer, refrendó definitivamente la extinción de estos mecanismos que han sido repudiados por casi todos los tratadistas de las ciencias del derecho. Estos sistemas que parecían entorpecer el ejercicio de la justicia penal, fueron descartados en el decreto 1861 del año pasado por el Gobierno, que en uso de facultades del Congreso reformó así, en forma parcial, la ley procesal. Consultado el 05 de abril de 2018. En línea: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-51268>

⁵ Ibid.

contradictorio, con oralidad y de forma pública, dando mayores garantías a los procesados y estableciendo la figura del juez con función de control de garantías.

Respecto de la figura, la Sentencia C-1154 de 2005, de Mg. Ponente Manuel José Cepeda Espinosa decide sobre la constitucionalidad de la Ley 906 de 2004 por considerar la configuración de una omisión legislativa por parte del congreso de la República en tanto ha dejado de regular los jurados de conciencia de que trata el Acto Legislativo 03 de 2002, con lo que se esclarece la potestad legislativa del Congreso y la innecesaridad del jurado para tomar una decisión, pues se trata de una facultad del órgano en sentido abstracto y dispositivo, no en sentido estricto. Así, ha dicho:

“La Corte Constitucional encuentra que los argumentos que presenta el actor se refieren a una omisión legislativa absoluta ya que el cargo se dirige contra la total falta de regulación de los jurados de conciencia en la Ley 906 de 2004. Adicionalmente, se destaca que las omisiones legislativas deben desprenderse de un deber constitucional del legislador. El demandante deriva dicho deber constitucional del artículo 116 de la Constitución y de los artículos 4 y 5 transitorios del Acto Legislativo 02 de 2003. Sin embargo, de los anteriores mandatos constitucionales se desprende una facultad de investir a los particulares, de manera transitoria, de la función de administrar justicia como jurados, pero no un deber específico e ineludible, que de no ser cumplido impediría el funcionamiento del nuevo sistema. Por lo tanto, al verificar que el cargo presentado en la demanda se funda en una omisión legislativa absoluta, la Corte Constitucional se inhibirá de efectuar pronunciamiento sobre éste.”

La consideración constitucional de que nuevamente se establezcan jurados de conciencia, como se lee del texto plasmado por el constituyente en el artículo 116 de la Carta Política, puede obedecer a los planteamientos filosóficos que orientan el Estado Social de Derecho, propios de la ilustración y revividos por Colombia tras la luchas de la sociedad contra flagelos como la delincuencia, la violencia, la corrupción y la falla sistemática de todos los aparatos del Estado para proteger los Derechos Humanos, que impulsaron la realización de la Séptima papeleta.

Las cuestiones culturales y las condiciones propias de la administración de justicia en Colombia han sido consideradas al momento de manejar la figura en el ordenamiento jurídico, en tanto las particularidades sociales hacen más difícil la consecución de juicios justos y que

no estén viciados de subjetividad, cuando se presentan altos índices de polarización entre los individuos. Debe resaltarse, además, que la notable demora en los procesos fue considerada una razón fundamental para erradicar paulatinamente la figura; hecho que trasciende a la actualidad, pues el periodo de tiempo en que puede llevarse a término un proceso penal en Colombia puede ser incomprensiblemente largo, en comparación con otros Estados del hemisferio.

La falta de motivación y la inestabilidad que suponían los juicios por parte de los jurados de conciencia, en sentido lato, fue el principal detonante de su erradicación en Colombia, pues con la llegada de nuevas garantías constitucionales y legales, resultaba improcedente que no se tutelaran Derechos Fundamentales con la elección de los jurados, o que los bienes jurídicamente tutelados se supeditaran a la falta de sustento de las decisiones proferidas por los jurados. Se trata entonces de una orientación a sopesar más la validez y la justicia como criterios de validez del Derecho dentro del Sistema colombiano, especialmente con la llegada del modelo adversarial, que blindó de nuevas garantías al procesado. En ese sentido y para arrojar luz sobre la dificultad del asunto, que no es un tema de poca monta, la posibilidad de pedir una revisión del fallo adoptado por un jurado de conciencia se vería afectada por la falta de motivación de éste, lesionando así el Debido Proceso, que vino a ser configurado y tutelado en sentido estricto con la Constitución de 1991.

La implementación del Jurado, según Riveros y Tobón supondría además un costo elevado para el Estado, en donde tiene fundamento la falta de interés político por parte de la Administración para consagrar la figura en el ordenamiento.

Conclusiones

Si bien el Sistema Penal colombiano consagra un modelo de tendencia adversarial construido en base al modelo anglosajón norteamericano, en donde se ha buscado implementar medidas tendientes a la descongestión y reestructuración del proceso, ha sido concebido con diferencias importantes respecto de instituciones como el Jurado, como quiera que éste no ha sido implementado en Colombia, manteniendo un sistema donde el juicio de reproche está en cabeza del juez. Ello, no obstante, de obedecer a mayores garantías y prerrogativas en sede procesal.

Los jurados de conciencia, que fueron erradicados en Colombia con sustento en la descongestión del aparato judicial y persiguiendo un juicio con mayor seguridad jurídica o respeto por los bienes jurídicos tutelados, no han desaparecido totalmente del ordenamiento

jurídico, encontrándose supeditados a su reglamentación por parte del Congreso de la República; lo que parece no tener mayor posibilidad en el panorama político y legal actual. Su desvinculación de la Ley colombiana obedece también a la consolidación de un Estado Social de Derecho, en donde si bien el sustento es la democracia, se busca más estabilidad y respecto por el debido proceso que el demostrado en años anteriores con la implementación de la figura en Colombia.

No obstante haber sido suprimida la figura, existen mecanismos e instituciones idóneas consagradas en el ordenamiento jurídico que hacen posible la materialización de juicios justos, a la luz de los modelos adversariales y con respeto por las garantías procesales de inmediación, contradicción y concentración.

Bibliografía

- Beetham, David. *The legitimation of power*. Nueva York: Humanities Press International , 1991.
- Berkowitz , J S. "Breaking the silence: Should jurors be allowed to question witnesses during trial?" *Vanderbilt Law Review*, 1991: 117-147.
- Castillo, E B. "Derecho Penal Colombiano." Agosto 2016, 17. <http://derechopenal-colombia.blogspot.com.co/2011/06/importancia-de-la-audiencia.html> (accessed Marzo 29, 2018).
- CISPA. "Comisión Intersectorial para el seguimiento del Sistema Penal Acusatorio." n.d. http://cspa.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=1 (accessed Marzo 29, 2018).
- Congreso de la República. "Ley 599 ." *Código Penal* . Bogotá, 2000.
- . "Ley 906." *Código de Procedimiento Penal*. Bogotá, 2004.
- Galeano, Maria Eumelia. *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Medellín : Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2009.
- Gargarella, Roberto. *La Justicia frente al gobierno*. Barcelona: Ariel, 1996.
- Lipset, Seymour Martin. *Political man: the social bases of politics*. New York: Anchor Books, 1963.
- Riveros Rengifo, Maria Paula, and Francisco Bernate Tobón Camacho. *Estudio sobre la viabilidad de la implementación del Jurado de Conciencia en el ordenamiento jurídico colombiano*. Bogotá: Universidad del Rosario, 2017.
- Sanclair, R K. *Democracy and Participation in Athens*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Tamayo, A A. "El jurado popular en Colombia en el juicio criminal ordinario. Participación ciudadana y justicia penal en Medellín." *Revista de Indias*, 2016.
- Valls, Quico. "Justicia Democrática: el uso crítico de la Constitución (Conversación con Perfecto Andrés Ibáñez, Carlos Jiménez Villarejo, José Ma. Mena, Claudio Movilla y Doménico Pulitano)." *El viejo topo*, 1981: 7 y 8.

John Ely, *Democracy and distrust*, Harvard University Press, Cambridge, 1980, p. 73 y ss.